



MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**SENTENCIA EXTRANJERA CONTESTADA N° 8.542/EC- CORTE ESPECIAL**

**REQUIRENTES:** MARIA AGUINDA SALAZAR Y OTROS

**REQUERIDA:** CHEVRON CORPORATION

**RELATOR:** MINISTRO FELIX FISCHER

**DICTAMEN N° 2811/2015**

**RESUMEN:** SENTENCIA EXTRANJERA CONTESTADA. ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE Y A LA POBLACIÓN LOCAL, SENTENCIA ORIUNDA DE LA JUSTICIA DEL ECUADOR, FRAUDE DE LA SENTENCIA EXTRANJERA RECONOCIDA POR LA JUSTICIA NORTEAMERICANA. CONFIGURACIÓN DE OFENSA AL ORDEN PÚBLICO. PROHIBICIÓN. ART. 6° DE LA RESOLUCIÓN 9/2005-STJ (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA). NO HOMOLOGACIÓN.

1. La existencia de decisión pronunciada por la justicia norteamericana, en el sentido de que la sentencia extranjera habría sido dictada mediante fraude, entre ellos la corrupción del magistrado que pronunció el *decisum* homologando, lleva a la conclusión de la existencia de ofensa al orden público, que la torna apta para apartar la pretensión del pedido homologatorio, en la forma del art. 6° de la Resolución n° 9/2005-STJ.

2. Dictamen por la **no homologación** de la sentencia extranjera contestada.

**Excelentísimo Señor Ministro Relator:**

Se trata de un pedido de homologación de sentencia extranjera, formulado por MARÍA AGUINDA SALAZAR y otros 46 (cuarenta y seis) requirentes, fundado en el art. 105, I, “i”, de la Constitución Federal, y en la Resolución n° 9/2005 del Superior Tribunal de Justicia, que fue pronunciada en los autos del Expediente n° 2003-0002, por la Sala Única de la Corte Provincial de Sucumbíos, Ecuador, contra la empresa CHEVRON CORPORATION. Allí se determinó el pago, a favor de los requirentes, de US\$ 8.646.160.000,00 (ocho billones, seiscientos cuarenta y seis millones, ciento sesenta mil dólares) a título de reparación de daño ambiental a la población local, y el mismo valor a título de daños punitivos, además del porcentaje del 10% sobre el *quantum* condenatorio, referido a lo dispuesto en el art. 43 de la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador y del 0,1% relativo a los honorarios de los abogados (fs. 2/11).

En suma, los requirentes sostienen que la parte requerida incorporó y sucedió a TEXACO INC., la cual, por un período de 28 años, a través de TEXPET,



**MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

su subsidiaria, explotó petróleo en el Ecuador, causando los daños que motivaron la sentencia homologada.

Informan que todas las partes requirentes, así como CHEVRON CORPORATION integraron la demanda instaurada en el Ecuador, es decir, tienen legitimidad para figurar en los polos activo y pasivo de este juicio de homologación.

Alegan, además, que el pedido cumple con todos los requisitos de la Resolución n° 9/2005 de la Corte Superior, pues la decisión bajo análisis fue dictada por juzgado competente, tuvo notificaciones válidas, pasó en autoridad de cosa juzgada y no es contraria a la soberanía nacional, ni daña el orden público. En razón de ello, requirieron la homologación de la decisión, a fin de que, en Brasil, sea reconocido el título ejecutivo.

La requerida fue citada por rogatoria (fs. 881/893) y presentó contestación, en la que postula la no homologación de la sentencia extranjera, apoyada en los siguientes argumentos: (i) irregularidades en la representación procesal de los actores, porque la petición está acompañada solo por la representación de Abogado extranjero, sin el debido poder traducido a la lengua nacional y sin poderes específicos para ingresar con el pedido homologatorio; (ii) ausencia de jurisdicción brasileña para ejecutar la decisión homologada, pues su sede está ubicada en los Estados Unidos de América y no tiene ninguna filial o sucursal o, incluso, subsidiarias directas en Brasil, además de no haber ninguna obligación a ser cumplida en este país; (iii) falta de interés de actuar por parte de los actores y del Estado brasileño, porque ni siquiera existen bienes en el territorio nacional, pasibles de ejecución, y es inadmisibles poder suprimir la personalidad jurídica para invadir el patrimonio de otras empresas que no formaron parte del litigio que tramitó en el Ecuador; (iv) la ejecución de la sentencia está obstaculizada por resolución pronunciada por el Tribunal Arbitral de la Haya, ante el no cumplimiento de las obligaciones asumidas en el tratado suscripto entre los Estados Unidos de América y el Ecuador; (v) el *decisum* extranjero es fruto de una serie de fraudes e ilegalidades reconocidas por la Justicia norteamericana que se negó a homologarlo, además de constituir persecución política a la requerida, demostrando una ofensa al orden público y a las buenas costumbres, incluyendo la actuación de los magistrados ecuatorianos; (vi) inexistencia de autoridad de cosa juzgada, porque fue impetrado recurso de casación que fue admitido para su juzgamiento,

2

VDZ\_SEC\_8542\_EC\_casochevron.odt.

Documento electrónico e-Pet n° 1138179 con firma digital.

Signatario (a): NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO N° SERIE CERTIFICADO: 4254984763268464897.

Id. Sello de Tiempo: 439500 Fecha y Hora: 13/05/2015 13:50:20 hs

CERT. MERRILL VER



**MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

existiendo, aún, otras posibilidades para recurrir; **(vii)** inexistencia de eventos de daños ambientales reconocidos en la resolución, pues quedó comprobado que fueron creados artificialmente en el proceso extranjero; **(viii)** posibilidad de suspensión de este procedimiento homologatorio hasta la decisión final a ser pronunciada por el Tribunal Arbitral de la Haya; **(ix)** celebración de un acuerdo entre el Gobierno ecuatoriano (único legitimado a la época para tutelar los derechos difusos y colectivos), provincial y municipal y Petroecuador y TexPet, de remediación ambiental, por un valor de US\$ 40 millones de dólares, con programas sociales, y de liberación de responsabilidad a las actividades desarrolladas, acto jurídicamente perfecto y que hizo cosa juzgada material, mediante la concesión de quita, en cuanto a cualquier discusión acerca de un eventual daño; **(x)** ilegitimidad de la requerida, puesto que las actividades que supuestamente causaron el daño ambiental fueron ejercidas por el consorcio compuesto por TexPet y por Petroecuador, pero la acción fue propuesta solamente contra CHEVRON CORPORATION, que no era integrante de la referida unión, nunca explotó petróleo en el Ecuador y no era sucesora de Texaco Inc. o de TexPet; **(xi)** hubo violación a los principios de legalidad, de reserva legal, de prohibición al enriquecimiento ilícito, de proporcionalidad y de razonabilidad en cuanto a la ausencia de fundamentación referida a los “*daños punitivos en el Ecuador, en Brasil o en el escenario internacional*”, implicando también ofensa al orden público; **(xii)** nulidad de la sentencia, por haber incurrido en juzgamiento *extra petita* al acoger pedidos formulados extemporáneamente; **(xiii)** falsificación de firma de, por lo menos, 20 de los actores de la demanda de la acción que dio lugar a la sentencia que se pretende homologar, además de que otros hayan colocado sus firmas de manera equivocada, inducidos a error de consentimiento, por pensar que se trataba de pedido de medicamento; **(xiv)** violación de los principios de igualdad y de moralidad administrativa, frente al tratamiento diferente dado a los integrantes del consorcio, con privilegios para Petroecuador; **(xv)** inexistencia de jurisdicción del Ecuador con relación a CHEVRON CORPORATION; e **(xvi)** interferencia del Poder Ejecutivo en la sentencia, afectando la independencia del juzgador, el principio del juez natural



**MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

y de la separación de poderes (fs. 904/1.048). La respuesta estuvo acompañada de la documentación de fs. 1.049/17.098.

Debidamente distribuida (fs. 17.108) , fueron anexados por la requerida nuevos documentos (fs. 17.142/18.967), momento en que se reforzó el pedido de desestimación de la homologación postulada, bajo los siguientes argumentos: (i) en Canadá, el análisis del pleito homologatorio de la sentencia extranjera fue suspendido por tiempo indeterminado, ante la ausencia de algún vínculo empresarial de CHEVRON CORPORATION en aquel país; (ii) en Argentina, fue anulada la decisión de embargar bienes de las subsidiarias indirectas de la requerida, por entender que viola el orden público, teniendo dictamen de la Procuraduría General, en el sentido de que todas son sociedades distintas, así como la existencia de perjuicio al debido proceso legal por no haber sido citadas en la acción; (iii) los consultores ambientales declararon que redactaron un informe secreto para el perito oficial y revelaron que no hubo daño atribuido a la requerida; (iv) la pericia habría sido elaborada de manera fraudulenta, mediante el pago de determinada suma de dinero; y (v) los Abogados de los autores de la Acción de Lago Agrio, en la cual fue pronunciada la sentencia homologada, habrían engañado a un fondo de inversión especializado en financiación de litigios, “para financiar el esquema de extorsión contra **CHEVRON CORPORATION**, y que esa conducta representa fraude” (fs. 17.124/17.141).

Una vez más, la requerida solicitó adjuntar documental (fs. 18.980/19.962) que contenía informaciones posteriores, en especial, el hecho de existir modificación parcial en la sentencia extranjera pronunciada en el Ecuador, en razón del “recurso de casación”, en el cual se excluyó la condena al pago de US\$ 8,6 billones que se habían fijado como consecuencia del supuesto daño punitivo. Informa, aún, que se encuentra pendiente de apreciación la “acción extraordinaria de protección” que fue interpuesta por la requerida y conocida por la Corte Constitucional del Ecuador (fs. 18.974/18.979).

En una nueva oportunidad, la requerida también anexó copia de la sentencia dictada por la Justicia norteamericana (fs. 19.992/20.949), cuya conclusión apunta a que la decisión a ser homologada habría sido “obtenida por medio de fraude” (fs. 19.968/19.991), y además otros documentos (fs. 20.953/21.007).

4

VDZ\_SEC\_8542\_EC\_casochevron.odt.

Documento electrónico e-Pet n° 1138179 con firma digital.

Signatario (a): NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO N° SERIE CERTIFICADO: 4254984763268464897.

Id. Sello de Tiempo: 439500 Fecha y Hora: 13/05/2015 13:50:20 hs

CERT. MERRILL VER



**MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

En respuesta, los requirentes, salvo en cuanto a los daños punitivos, reiteran la pretensión de homologar la sentencia extranjera, aduciendo, en suma, que: **(i)** no existe ninguna violación al orden público; **(ii)** no existe irregularidad en la representación procesal de los actores, la que, en caso de existir, estaría saneada con la presentación de la documentación complementaria (fs. 21.120/21.255); **(iii)** los argumentos deducidos en la contestación se relacionan al mérito de la cuestión ya demandada y decidida en Ecuador, y está fuera de los límites restringidos de examen en cuanto a la homologación de la sentencia por parte del Superior Tribunal de Justicia; **(iv)** la inequívoca jurisdicción en Brasil para la homologación de la decisión extranjera, en razón del compromiso de reciprocidad; **(v)** existe interés de los actores, porque la requerida posee bienes en el país, pertinente a la explotación de petróleo, y la aprobación de la homologación es independiente de la pretensión de ejecución de la decisión; **(vi)** quedó comprobada la autoridad de la cosa juzgada de la sentencia extranjera, puesto que en el derecho ecuatoriano, la posibilidad de interposición del “recurso de casación” constituye una acción autónoma y no de continuidad procesal, lo que la convierte en ejecutable, con autoridad de cosa juzgada; **(vii)** la suspensión sin motivo en el procedimiento arbitral no tiene el poder de surtir efectos en la Acción de Lago Agrio, una vez que los requirentes ni siquiera formaban parte del referido proceso; **(viii)** no existe quita por parte de la requerida, porque el acuerdo celebrado con el Gobierno ecuatoriano se refiere solo al consorcio TexPet- Petroecuador; **(ix)** CHEVRON CORPORATION tiene legitimidad para figurar en el polo pasivo en la acción en la que fue dictada la sentencia que se pretende homologar; **(x)** no hubo actos de fraude, conforme lo alegado por la requerida, en la demanda donde quedó condenada en razón de los daños ambientales efectivamente existentes; **(xi)** la pretensión de la requerida significa una falta de respeto a la soberanía de los Estados; **(xii)** CHEVRON CORPORATION desea que el Poder Judicial brasileño se utilice de decisiones extranjeras desvirtuadas, no homologadas (fs. 21.019/21.061). Se adjunta dictamen de abogado (fs. 21.063/21.118) y otros documentos (fs.21.156/21.615).

Sobrevino la contra-respuesta, en la que la requerida: **(i)** aparta la intención de que pretende rediscutir el fondo de la acción juzgada en Ecuador; **(ii)** afirma que los requirentes no sanearon las irregularidades referidas a la representación procesal,

5

VDZ\_SEC\_8542\_EC\_casochevron.odt.

Documento electrónico e-Pet n° 1138179 con firma digital.

Signatario (a): NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO N° SERIE CERTIFICADO: 4254984763268464897.

Id. Sello de Tiempo: 439500 Fecha y Hora: 13/05/2015 13:50:20 hs

CERT. MERRILL VER



**MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

los que, además, no demostraron el interés de actuar frente a la Justicia brasileña; (iii) asevera que el “recurso de casación” no saneó la sentencia dictada mediante fraude, reconocida por los Estados Unidos de América; (iv) las decisiones arbitrales transformaron la decisión temporariamente inejecutable en Brasil y en Ecuador; (v) afirma que la quita derivada del acuerdo celebrado generó efectos *erga omnes*; y (vi) repiten los demás argumentos expuestos en la contestación de demanda y en las peticiones que anexó en el sentido por el cual el pleito no cumple con los requisitos necesarios a su homologación (fs. 21.621/21.685). A la aludida pieza procesal, adjuntó diversos documentos (fs. 21.687/21.914).

Vienen los autos al Ministerio Público Federal para manifestación.

**II**

Se sabe que para los fines de la homologación de la sentencia extranjera en el Superior Tribunal de Justicia, es necesario el llenado de requisitos objetivos, que están dispuestos en la Resolución n° 9/2005-STJ, a saber: (a) copia de la resolución dictada por autoridad competente; (b) prueba de la citación del requerido o de la notificación legal de su rebeldía en la acción que tramitó en el exterior; (c) demostración de la cosa juzgada de la sentencia; y (d) autenticación por parte del Consulado General de Brasil en el lugar y la indispensable traducción oficial de todos los documentos (arts. 3° y 5°); (e) que no exista ofensa a las buenas costumbres, al orden público y a la soberanía nacional en la decisión de ultramar.

De acuerdo al Ministerio Público Federal, es evidente la pertinencia de uno de los fundamentos presentados por la requerida, haciendo innecesario, por lo tanto, el examen de los demás puntos presentados por las partes. Se trata de la posibilidad real y concreta de que la sentencia extranjera que se pretende homologar haya sido pronunciada mediante una serie de conductas fraudulentas.

No se olvida que el acto de homologación de la resolución dictada ultramar, aunque haga prevalecer la aplicación de la ley extranjera en territorio nacional, es un procedimiento que envuelve un juicio de estrecha deliberación, de contencioso limitado, estando prohibido un re-examen del fondo de lo ha sido decidido



**MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

en forma acertada o no, por parte del Poder Judicial de otro país. En principio, si no configurada la ofensa a las buenas costumbres, al orden público o a la soberanía nacional, y si se han cumplido los demás requisitos formales, no hay otro camino más que homologar la sentencia.

Frente a ello, no cabe verificar, en este campo, si, en la especie, existieron, o no, los daños ambientales por los cuales la requerida quedó condenada en Ecuador. Solo le incumbe a la Corte Superior, en el ámbito del pedido de homologación, analizar si el pleito cumple con los requisitos formales contenidos en la Resolución nº 9/2005-STJ, y si, en el caso específico, la sentencia extranjera contestada ofende las buenas costumbres, el orden público o la soberanía nacional.

Es justamente este último aspecto en el que se verifica la imposibilidad de validar el referido juzgamiento, no solo por la Justicia brasileña, sino también *–obiter dictum–* en cualquier otra jurisdicción extranjera, sea en Estado Democrático de Derecho o no. Esto es así porque, de las piezas que componen el presente procedimiento, se observan innumerables elementos que apuntan una gran probabilidad de que la decisión homologada fue el resultado de una serie de fraudes.

En la especie, se observa que la requerida fue procesada por la práctica de actos que habrían causado daño ambientales muy graves y afectado sobremanera a la población ecuatoriana, principalmente indígena, derivado de la explotación de petróleo al este del país, durante aproximadamente 30 años por parte de la llamada subsidiaria TexPet. Conforme a lo anteriormente mencionado, la sentencia inicial condenó a la recurrida al pago de US\$ 8.646.160.000,00 (ocho billones seiscientos cuarenta y seis millones, ciento sesenta mil dólares) a título de reparación del daño al ambiente y a la población local, y el mismo valor a título de daños punitivos, además del 10% sobre el *quantum* condenatorio referido a lo dispuesto en el art. 43 de la Ley de Gestión Ambiental de Ecuador, y del 0,1% relativo a los honorarios de abogados. La requerida interpuso “recurso de casación”, que resuelto parcialmente procedente, excluyó de la condena el valor concerniente a los daños punitivos, manteniendo la decisión. Por el momento, de acuerdo a lo informado por la requerida, se encuentra pendiente de juzgamiento, por parte de la Corte Constitucional ecuatoriana, la “acción extraordinaria de protección”.



**MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Por ocasión de la contestación y en las distintas oportunidades en las que se manifestó, CHEVRON CORPORATION insiste en alegar que el *decisum* extranjero es fruto de una serie de fraudes e ilegalidades y que, por esa razón, ofende al orden público, hecho que impide su homologación.

De la vasta documentación adjunta durante el proceso de este juicio, se extraen, v.g., resoluciones dictadas por el Juez de Distrito Federal de los Estados Unidos de América, Distrito Sur de Nueva York y Distrito de Nuevo México, que concedieron los pedidos formulados por CHEVRON CORPORATION y otros, a efectos de la producción de prueba oral y presentación de *hard drives* y contenido referido a algunas direcciones electrónicas, entre otros elementos, destinados a la inspección judicial, cuya posesión se mantenía, en parte, por el Abogado de los actores de la Acción del Lago Agrio, señor Steve Donziger (Expediente: 1:10-mc-00002-LAK y Expediente: 1:10-mc-00021-JCH-LFG), en razón de las acusaciones indicadas por la requerida en cuanto a la formación probatoria (fs. 4.266/4.269, 4.417/4.421, 4.424/4.431 y 4.457/4.465).

Vale destacar, entre algunas de las pruebas que se produjeron, a modo ejemplificativo, la realización de la pericia en la que se constató que, entre las firmas supuestamente puestas por los autores de la acción que tramitó en el Ecuador, veinte son falsas, conforme se infiere del “*RESULTADO DEL EXAMEN*” (fs.5.081):

Las 20 (veinte) firmas examinadas que aparecen en el documento denominado Prueba Q-1 no fueron colocadas por los 20 (veinte) actores individuales, y no fueron puestas por las mismas personas que presentaron las firmas conocidas correspondientes que aparecen en los documentos denominados Prueba K-1 a K-4.

Sin embargo, ¡no es solo eso! Luego de la producción de diversos elementos en juicio, en los Estados Unidos de América, concluido el Proceso n° 1:11-cv-00691-LAK-JCF, del Distrito Sur de Nueva York, en efecto, se concluyó por la existencia de fraude alegado por la requerida. Se confieren fragmentos de la parte introductoria de la resolución norteamericana, que, a pesar de su extensión, vale la pena hacer referencia, puesto que bien reflejan la alta posibilidad de que haya habido corrupción en los referidos autos (fs. 19.998/20.000):





**MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

“Este caso es extraordinario. Los hechos son muchos y, en por veces, complejos. Incluyen cosas que normalmente sólo suceden en Hollywood –correos electrónicos en código entre Donziger y sus colegas en los que se describen sus interacciones privadas - y sus maquinaciones dirigidas - con jueces y un perito designado por el juez y pagos desde una cuenta secreta a un perito supuestamente neutral, un abogado que invitó a un equipo de filmación a innumerable reuniones privadas de estrategia e incluso a reuniones ex parte con jueces, un juez ecuatoriano que alega haber redactado la sentencia de miles de millones de dólares pero que era tan inexperto y se sentía tan inseguro en causas civiles que hizo que otra persona(un ex juez que había sido destituido de su cargo) redacte en su lugar algunas decisiones judiciales en materia de derecho civil; un dactilógrafo de 18 años que supuestamente hizo trabajos de investigación en Internet sobre el las Leyes norteamericanas, inglesas y francesas para el mismo juez, que sólo sabía español, y mucho más. Las pruebas son voluminosas (...).

Luego de apreciar todas las pruebas, incluida la credibilidad de los testigos –si bien varios de los más importantes se negaron a testificar–el Tribunal concluye que Donziger (...) y los abogados ecuatorianos que lideraba corrompieron el juicio de Lago Agrio. Presentaron pruebas falsas. Ellos coaccionaron a un juez, inicialmente hacer con que un perito supuestamente imparcial fuera apuntado como “Experto Global”, responsable por la evaluación general de los daños en la región, y, después, para que ese importante puesto fuera destinado a otra persona elegida a dedo por Donziger para “jugar en el equipo” de los Autores. Ellos entonces pagaron secretamente una empresa de consultoría de Colorado para redactar todo o gran parte del informe del Experto Global, presentaron falsamente el informe como si fuera el trabajo del perito designado por el juez y supuestamente imparcial, y afirmaron verdades a medias o peores a los tribunales de los Estados Unidos para tratar de evitar la exposición de esa y otras infracciones lícito.

Finalmente, el equipo de los Autores redactó la sentencia de Lago Agrio y prometió US\$500.000 al juez ecuatoriano para que decidiera a favor de ellos y firmara la sentencia. Si alguna vez existió un caso exigiendo una medida equitativa en cuanto a una sentencia obtenida por fraude, este es el caso.

La cuestión aquí no es lo que sucedió en el Oriente hace más de veinte años ni quién, si es que hubo, es ahora responsable por cualquier de los males cometidos entonces. La cuestión es saber si la una sentencia judicial fue obtenida por medios corruptos, independientemente si la causa fue justa o no. Un demandado inocente no tiene más derecho que uno culpable de presentar pruebas falsas, ni a cooptar y pagar a un perito nombrado por el tribunal, ni a ejercer coerción ni sobornar a un juez o jurado. Entonces, aunque, aunque Donziger y sus clientes tuvieran una causa justa –y este Tribunal no expresa opinión alguna al respecto – ellos no tenían derecho a corromper el proceso para lograr su objetivo. No se hace justicia imponiendo injusticia. Los fines no justifican los medios. No existe la defensa “Robin Hood” para unas conductas ilegales e irregulares. Y las excusas de los demandados que dicen que “así es como se hacen las cosas en Ecuador” –lo que en realidad es un tremendo insulto para el pueblo de Ecuador–no los ayudan. Las acciones indebidas llevadas a cabo por Donziger y su equipo legal ecuatoriano resultarían ofensivas para las leyes de cualquier país que aspire al Estado de Derecho, incluso para Ecuador –y ellos lo sabían. De hecho, un miembro del equipo legal ecuatoriano, en un momento de puro pánico, admitió que si salieran a la luz documentos que

VDZ\_SEC\_8542\_EC\_casochevron.odt.

Documento electrónico e-Pet n° 1138179 con firma digital.

Signatario (a): NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO N° SERIE CERTIFICADO: 4254984763268464897.

Id. Sello de Tiempo: 439500 Fecha y Hora: 13/05/2015 13:50:20 hs

CERT. MERRILL VER



**MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

exponen sólo parte de lo que habían hecho, “aparte de destruir el juicio, podemos ir todos, sus abogados, a la cárcel”.

Al emitir un juicio de valor sobre los hechos que constituyeron la conclusión dictada por la Justicia norteamericana, la decisión hace referencia a graves afirmaciones del Abogado Steve Donziger, en cuanto al inherente carácter de corruptos de los jueces ecuatorianos, en el sentido de que actúan mediante presión mediática, popular y política, habiendo inclusive declarado, en determinadas oportunidades, que la única forma de obtener respeto de esos magistrados “*es que se tengan miedo de nosotros*”, siendo que, para eso, tienen que “*crean que nosotros tenemos el control de sus carreras, sus trabajos, sus reputaciones, es decir, su capacidad para ganarse la vida*” (fs. 20.019).

Además, se utilizó una estimación billonaria imprecisa, esto fue reconocido por el Ingeniero Ambiental contratado por el mencionado Abogado, haciendo circular declaraciones “*falsas y engañosas*” (fs. 20.024). La gravedad no se termina ahí. De conformidad con lo expuesto en la decisión que se comenta, hubo también uso de pericia falsificada por parte de su equipo. Se confiere (fs. 20.031/20.032):

El 14 de febrero y el 8 de marzo de 2005, respectivamente, el equipo de los LAPs presentó al Tribunal de Lago Agrio aquello que supuestamente serían los informes de su perito indicado para inspecciones judiciales de los lugares Shushufindi 48 y Sacha 94. Ellos tenían las firmas y la rúbrica del Doctor Calmbacher y supuestamente habían sido escritos por él. Los informes concluían que “*productos químicos altamente tóxicos*” contaminaron el área y que el saneamiento de Tex-Pet era “*inadecuado o no suficiente*”. Sin embargo, cuando esos informes le fueron presentados en una declaración varios años después, el Dr. Calmbacher dijo: “*Yo no saqué estas conclusiones y yo no escribí este informe*”. (...) Así, alguien del equipo de los LAPs, usó las páginas en blanco que Calmbacher había rubricado y sus páginas de firma para presentar en su nombre dos informes, que contenían conclusiones a las cuales él no había llegado.

(...) Eso quiere decir que alguien del equipo ecuatoriano de los Actores revisó las minutas de los informes, los imprimió en las páginas en blanco rubricadas por el Dr. Calmbacher, y dictó los informes con la certeza de que eran falsos.

La Justicia norteamericana concluyó, también, que uno de los jueces que actuó en la Acción de Lago Agrio fue coaccionado a cancelar las inspecciones judiciales faltantes y a nombrar al referido Perito Global, de la introducción, sobre el cual, según aquél Juicio, hubo un total control por parte del no identificado Abogado,



**MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

tanto que, además de los pagos normales y legales realizados por los actores de la acción “no fueron los únicos que los LAPs le hicieron a Cabrera”, ya que “pagaban también fuera del proceso judicial”, aún antes de haber iniciado el trabajo pericial, por medio de una “cuenta secreta” (fs.20.049), en la cual fueron depositados por lo menos 120 mil dólares, conducta prohibida por la legislación ecuatoriana (fs.20.050) y considerada por la Justicia norteamericana como ilícita e inapropiada (fs.20.051). Asimismo, consta que el informe referido a la pericia oficial fue, en su mayor parte, confeccionado por un equipo particular contratado por el Abogado Steve Donziger (fs. 20.056).

Debe destacarse, aún, el lanzamiento del film “Crude”, documental que registró casi todo lo sucedido en el referido litigio. No obstante, la edición para que las filmaciones “comprometedoras” no fuesen reveladas, CHEVRON CORPORATION tuvo acceso a ellas, pudiendo, entonces, comprobar las sospechas que tenía en cuanto a los mencionados fraudes (fs.20.067/20.069).

Y el punto tal vez de mayor gravedad sea la revelación de que el Juez Zambrano no fue el autor de gran parte de la sentencia que condenó a la requerida (fs. 20.096). En cuanto a este aspecto, se verificaron partes de la fundamentación de la resolución dictada en el Juicio de los Estados Unidos de América (fs. 20.096/20.150):

Esa parte examina las pruebas aplastantes e irrefutables que establecen que partes de, no mínimo, ocho de los documentos de trabajo interno de la equipe de los Autores aparecen literalmente o sustancialmente en la Sentencia (...) Los Demandados no han conseguido explicar cómo el producto de su trabajo interno - sus "huellas digitales" – aparecen en la Sentencia... Como se verá, la conclusión más lógica es que los miembros del equipo de los Autores escribieron al menos partes importantes de la Sentencia, y probablemente, prácticamente la totalidad de la misma, y que ellos copiaron de sus propios archivos internos al hacerlo (...).

(...)

(...) la Sentencia contiene partes de ocho documentos de los archivos internos de los Autores, muchos de ellos *in haec verba*. (...)

(...)

Ante estas circunstancias, el Tribunal considera que los LAPs redactaron la Sentencia en su totalidad o en su mayor parte y que Zambrano dio poca o ninguna contribución además de su firma y, quizá, alguna edición leve, creada para tornar su lectura más parecida con otras decisiones que él firmó en este y otros casos (...).

(...)

En vista del expediente entero – incluyendo, sin limitación, las pruebas circunstanciales que dominan predominantemente el argumento de Chevron y la evaluación del Tribunal de todos los testimonios pertinentes– este Tribunal



**MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

concluye que (a) Zambrano acordó con Fajardo arreglar de la causa por un pago US\$ 500.000 a ser pagado con el producto de la sentencia, (b) Fajardo lo hizo con la expresa autorización de Donziger, (c) los LAPs redactaron la mayor parte de la Sentencia, y (d) Zambrano firmó su borrador sin modificaciones que pudieran traer consecuencias como parte del *quid pro quo* por la promesa de US\$ 500.000.

Se constataron tantas irregularidades e ilegalidades que la Justicia norteamericana concluyó que la Sentencia de la Acción de Lago Agrio, cuya ejecutoriedad los requirentes buscan obtener en este Tribunal, “fue obtenida mediante fraude”, tanto mediante corrupción como mediante coacción de los Jueces y del Oficial de Justicia (fs. 20.174), conforme es posible inferir del siguiente párrafo (fs.20.175/20.176):

Este Tribunal ha concluido, en virtud de pruebas claras y convincentes, que Zambrano fue corrompido por Donziger y los LAPs. Con la aprobación de Donziger, Fajardo concordó en pagar a Zambrano \$500.000 del resultado de la Sentencia, por lo cual, en cambio, Zambrano decidiría la demanda de Lago Agrio en favor de los LAPs y firmaría una sentencia fornecida por los LAPs (...).

El Tribunal ha concluido, también por medio de pruebas claras y convincentes, que Fajardo y Donziger coaccionaron al juez Yanez para permitir que los LAPs terminasen sus inspecciones faltantes, para apuntar un perito global y para apuntar a su elección, Richard Cabrera, para aquella función. Lo hicieron ante la amenaza de presentar una queja de mala conducta en un momento en el que estaba particularmente vulnerable y también bajo otras presiones.

(...)

El Tribunal conclui, basándose en pruebas claras y convincentes, que por lo menos algunos de tales pagos y beneficios, reales y prometidos, consistieron en sobornos ofrecidos para influenciar las acciones de Cabrera como perito global apuntado por el tribunal (...).

Después de narrar otros y diversos actos de extorsión, lavado de capitales y de corrupción, la Justicia norteamericana concluyó (fs.20.263):

La saga de la Acción de Lago Agrio es triste. Es perturbador que el camino de la Justicia sea pervertido. Los LAPs recibieron la celosa representación que ellos querían, pero triste porque no siempre fue caracterizada por la honra y honestidad también. Es incómodo que, según las palabras de Jeffrey Shinder, lo que ocurrió aquí probablemente significa que “nunca sabremos si había o no una acusación en contra de Chevron”.

Nosotros ya completamos todo el círculo. Como el Tribunal escribió en el comienzo, “[la] cuestión en este caso no es qué pasó en el Oriente hace más de veinte años ni quién, si es que lo hay, que ahora sea responsable por cualquiera de los delitos de aquella época. La cuestión dice respeto a saber si una sentencia judicial fue obtenida por



**MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

medios corruptos, independientemente de si la causa era justa o no”.

**La sentencia del caso Lago Agrio fue obtenida por medios corruptos.** Los demandados no puedan sacar provecho de esa decisión bajo ninguna forma. La orden dictada hoy evitará que ellos lo hagan (negritas nuestras).

Es suficiente para acordar que existe una fundamentada sospecha y elevadísima probabilidad de que el *decisum* fue fruto de una serie de fraudes y de ilegalidades, así reconocidas por la Justicia norteamericana, tanto que se negó a homologarlo, demostrando una efectiva ofensa al orden público y a las buenas costumbres.

No se diga que la decisión judicial oriunda de Estados Unidos de América, que reconoció la práctica de fraude en la sentencia ecuatoriana, no serviría, por sí sola, para caracterizar una ofensa al orden público, bajo el fundamento de que no tiene valor “judicial” frente a la Justicia brasileña, toda vez que no habría sido objeto de homologación y, por lo tanto, desprovista de cualquier efecto jurídico.

No obstante, que el *decisum* impugnado no tenga eficacia judicial, vale decir, no tenga fuerza decisoria en el territorio nacional, se traduce en elemento de prueba (documental) – denominada por la doctrina “eficacia probatoria”<sup>1</sup> perfectamente válida en cuanto al supuesto evento de ilicitud en el dictado de la sentencia homologada, apta para limitar el otorgamiento del pleito inicial frente a la posible ofensa al orden público.

JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, en su obra *Comentarios al Código Procesal Civil*<sup>2</sup>, dedica capítulo exclusivo sobre el tema, cuya advertencia demuestra el valor probatorio de la sentencia extranjera no homologada en Brasil. Se confiere:

**54. Efectos independientes de la homologación-** La eficacia a la que se refiere el art.483, y de la cual se trató en comentario anterior, es la que tiene la sentencia extranjera *como acto decisorio*. Para que se manifieste en Brasil es indispensable, sin sombra de duda, la homologación. Sin embargo, esto no quiere decir, que ningún efecto pueda ser reconocido, independientemente de ella, al juzgado en territorio nacional.

13

---

<sup>1</sup> MIRANDA, Pontes de *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, Tomo V, 1974, p.64.

<sup>2</sup> 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 79.

VDZ\_SEC\_8542\_EC\_casochevron.odt.

Documento electrónico e-Pet nº 1138179 con firma digital.

Signatario (a): NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO Nº SERIE CERTIFICADO: 4254984763268464897.

Id. Sello de Tiempo: 439500 Fecha y Hora: 13/05/2015 13:50:20 hs

CERT. MERRILL VER



**MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Además, por lo menos tiene que admitirse que ella produzca desde ya si están presentes, claramente, todos los requisitos: los de generar, para quien haya de hacerlo valer aquí, el derecho a la homologación.

Pero también, **como documento utilizable para fines probatorios, la sentencia extranjera puede estar apta para surtir efectos en el territorio nacional, independientemente del acto formal del reconocimiento** (negrita nuestra).

Debe resaltarse que la prueba documental traída a los autos, en el caso, no se restringe a la mera ofensa al orden público interno, pues, en la especie, los actos ilícitos que habrían influenciado en el resultado de la sentencia extranjera son conductas que afrontan el orden público internacional, en particular, por los indicios fundados de corrupción – que lamentablemente está presente en espacios públicos y privados - configurando una amenaza a la democracia y al crecimiento económico, además de potencializar el escepticismo con relación al funcionamiento de las instituciones.

El orden público internacional, en la peculiar concepción dada por AMÍLCAR DE CASTRO<sup>3</sup>, también llamado orden social, no comporta una división y puede ser amenazado “*por leyes, actos y sentencias de otro país, así como por declaraciones de voluntad hechas en el extranjero, y el gobierno la resguarda, prohibiendo que se le atribuya un valor jurídico a esa actividad*”.

Aunque el orden público no tenga una definición propia en la legislación, ni unanimidad doctrinaria en cuanto a su concepto, no se necesitan mayores análisis para concluir que una sentencia dictada bajo el manto de lo delictivo choca y afecta sobre manera al orden social y, por eso, tiene el poder de limitar la admisión de eficacia de las decisiones extranjeras en el territorio nacional, en esos formatos nombrados<sup>4</sup>.

Confirmar la sentencia obtenida mediante fundados elementos de corrupción –así decidido con el cumplimiento del “*due process of law*” – es lo mismo que contribuir con el atraso social y hacer perpetuar de manera histórica los procesos de

---

<sup>3</sup> *Direito Internacional Privado*. 6º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p.225.

<sup>4</sup> Independientemente de quien haya sido, el orden público es uno de los más fuertes pilares de sustento del derecho internacional privado, en la medida en que puede contener/detener/impedir la aplicación del derecho extranjero incluso cuando la norma de solución de conflictos de leyes manda aplicarlo. Razón por la cual debemos siempre buscar el “equilibrio” entre la obligación de aplicar el derecho extranjero (como si fuese el juez extranjero) y el respeto al orden público local (BASSO, Maristela. *Curso de Direito Internacional Privado*. Sao Paulo: Atlas, 2009, p.262) VZD\_SEC\_8542\_EC\_casochevron.odt.



**MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

desmandos, de patrimonialización del Estado y de dominación social, política y económica.

La Convención Interamericana contra la Corrupción, de la OEA –Organización de los Estados Americanos, de la cual Brasil es signatario (Decreto n° 5.687/2006), estableció importantes premisas con relación a la problemática de la corrupción: a) la corrupción compromete la legitimidad de las instituciones públicas y atenta contra el desarrollo integral de los pueblos; b) la corrupción es uno de los instrumentos del cual se vale el crimen organizado para realizar sus fines; c) la democracia es condición para la estabilidad de las relaciones sociales y el desarrollo, exigiendo el combate efectivo a la corrupción; d) la formación de consciencia con relación a la gravedad del problema de la corrupción y la necesidad de reforzar la participación de la sociedad civil en la prevención y en la lucha contra ese mal es una estrategia importante a implementarse en los Estados; e) la corrupción se reviste de trascendencia internacional, exigiendo por parte de los Estados una acción coordinada para su combate eficaz; y f) la represión a la corrupción no puede prescindir de la erradicación de la impunidad.

Finalmente, no es suficiente recordar que, en casos mucho menos gravosos, la Corte Superior dejó de homologar la sentencia extranjera. Se confiere:

**SENTENCIA EXTRANJERA CONTESTADA. HOMOLOGACIÓN. MOTIVACIÓN SUFICIENTE. AUSENCIA. COMPETENCIA NO DEMOSTRADA. CITACIÓN. CARTA ROGATORIA. NECESIDAD.**

1. La sentencia bajo examen no tiene ningún rastro de fundamento, presentando una desnudez de motivación que llega a impresionar y recomienda definitivamente la improcedencia del pedido, bajo pena de una frontal falta de respeto al orden público nacional que significaría cancelar una resolución judicial teratológica. Precedente: SEC 880/IT, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 06.11.06.
2. No obra ningún elemento probatorio apto para demostrar la competencia de la Corte de Nueva York para analizar la demanda. La alegación deducida en el sentido de que el foro fue elegido por medio de contrato, no se encuentra respaldada en la referencia, cuyo instrumento ni siquiera fue traído a los autos con la intención de evidenciar la regularidad del proceso originario.
3. La única modalidad de citación admitida para el demandado domiciliado en Brasil es la realizada por carta rogatoria. Precedentes: SEC 1.483/LU, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 29.04.10; SEC 4.611/FR, Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, DJe 22.04.10; SEC 477/US, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 26.11.09; SEC 2.493/DE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 25.06.09.
4. Homologación no otorgada.

15

VDZ\_SEC\_8542\_EC\_casochevron.odt.

Documento electrónico e-Pet n° 1138179 con firma digital.

Signatario (a): NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO N° SERIE CERTIFICADO: 4254984763268464897.

Id. Sello de Tiempo: 439500 Fecha y Hora: 13/05/2015 13:50:20 hs

**CERT. MERRILL VER**



**MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

(SEC 684/US, Rel.Min. CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, juzgado en 01/07/2010, Dje 16/08/2010)

Por lo tanto, algunas de las razones por las cuales este *Parquet* entiende no viable la homologación de la sentencia extranjera que, todo indica, que fue dictada de manera irregular, en especial bajo desdichados actos de corrupción, importa ofensa al orden público internacional<sup>5</sup> y, por qué no, a las buenas costumbres con total falta de respeto a lo establecido por el art. 6º de la Resolución nº 9/2005 del Superior Tribunal de Justicia.

En base a lo dispuesto, el dictamen del Ministerio Público Federal es por la **no homologación** de la sentencia extranjera contestada.

Brasilia, 11 de mayo de 2015

**NICOLAO DINO**

Subprocurador General de la República

---

<sup>5</sup> Por encima de todo para un orden público internacional, regido por intereses universales, se exige coordinación y colaboración entre los Estados para mantener el equilibrio del medio ambiente, de la disciplina general y, por encima de todo, de la paz entre los pueblos (DOLINGER, Jacob. *Direito Internacional Privado: parte geral* 11º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 455).

VDZ\_SEC\_8542\_EC\_casochevron.odt.

Documento electrónico e-Pet nº 1138179 con firma digital.

Signatario (a): NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO Nº SERIE CERTIFICADO: 4254984763268464897.

Id. Sello de Tiempo: 439500 Fecha y Hora: 13/05/2015 13:50:20 hs

CERT. MERRILL VER



State of New York )  
Estado de Nueva York )  
 ) ss:  
 ) a saber:  
County of New York )  
Condado de Nueva York )

**Certificate of Accuracy**  
**Certificado de Exactitud**

This is to certify that the attached translation is, to the best of our knowledge and belief, a true and accurate translation from Portuguese into Spanish of the attached document.  
Por el presente certifico que la traducción adjunta es, según mi leal saber y entender, traducción fiel y completa del idioma portugués al idioma español del documento adjunto.

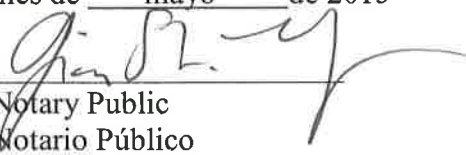
Dated: May 17, 2015  
Fecha: 17 de mayo de 2015

  
\_\_\_\_\_  
Nathan Haselby  
Project Manager – Legal Translations  
Merrill Brink International/Merrill Corporation

[firmado]

Nathan Haselby  
Gerente de Proyecto – Traducciones Legales  
Merrill Brink International/Merrill Corporation

Sworn to and signed before  
Jurado y firmado ante  
Me, this 17<sup>th</sup> day of  
mí, a los 17 días del  
May 2015  
mes de mayo de 2015

  
\_\_\_\_\_  
Notary Public  
Notario Público

[firmado]  
[sello]

**GINA MARIE STLAURENT**  
Notary Public, State of New York  
No. 01ST6146442  
Qualified in New York County  
Commission Expires May 15, 2018



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

**SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA N.º 8.542/EC – CORTE ESPECIAL**

**REQUERENTES:** MARIA AGUINDA SALAZAR E OUTROS

**REQUERIDA :** CHEVRON CORPORATION

**RELATOR :** MINISTRO FELIX FISCHER

**PARECER Nº 2811/2015**

**EMENTA:** SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AO MEIO AMBIENTE E À POPULAÇÃO LOCAL, SENTENÇA ORIUNDA DA JUSTIÇA DO EQUADOR. FRAUDE DA SENTENÇA ALIENÍGENA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA NORTE-AMERICANA. CONFIGURAÇÃO DE OFENSA À ORDEM PÚBLICA. VEDAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO 9/2005-STJ. NÃO HOMOLOGAÇÃO.

**1.** A existência de decisão proferida pela Justiça norte-americana, no sentido de que a sentença estrangeira teria sido proferida mediante fraude, entre elas a corrupção do magistrado que proferiu o *decisum* homologando, leva à conclusão da existência de ofensa à ordem pública, apta a afastar a pretensão do pleito homologatório, nos moldes do art. 6º da Resolução nº 9/2005-STJ.

**2.** Parecer pela **não homologação** da sentença estrangeira contestada.

**Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,**

Trata-se de pedido de homologação de sentença estrangeira, formulado por MARÍA AGUINDA SALAZAR e mais outros 46 (quarenta e seis) requerentes, com fundamento no art. 105, I, "i", da Constituição Federal, e na Resolução nº 9/2005 do Superior Tribunal de Justiça, que foi proferida nos autos do Processo nº 2003-0002, pela Sala Única da Corte Provincial de Sucumbíos, Equador, contra CHEVRON CORPORATION. Ali foi determinado o pagamento, em favor dos requerentes, de US\$ 8.646.160.000,00 (oito bilhões, seiscentos e quarenta e seis milhões, cento e sessenta mil dólares) a título de reparação de dano ambiental à população local, e o mesmo valor a título de danos punitivos, além do percentual de 10% sobre o *quantum* condenatório, referente ao disposto no art. 43 da Lei de Gestão Ambiental do Equador e de 0,1% relativo a honorários advocatícios (fls. 2/11).

Sustentam os requerentes, em suma, que a parte requerida incorporou e sucedeu a TEXACO INC., a qual, pelo período de 28 anos, através da TEXPET,



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

sua subsidiária, explorou petróleo no Equador, causando os danos que motivaram a sentença homologanda.

Informam que todas as partes requerentes, bem assim a CHEVRON CORPORATION, integraram a demanda instaurada no Equador, ou seja, têm legitimidade para figurar nos polos ativo e passivo deste pleito de homologação.

Alegam, ainda, que o pedido preenche todos os requisitos da Resolução nº 9/2005 da Corte Superior, pois a decisão em exame foi proferida por juízo competente, teve citação válida, transitou em julgado e não é contrária à soberania nacional, nem fere a ordem pública. Em razão disso, requereram a homologação da decisão, a fim de que, no Brasil, seja reconhecido título executivo.

A requerida foi citada por carta rogatória (fls. 881/893) e apresentou contestação, na qual postula a não homologação da sentença estrangeira, com apoio nos seguintes argumentos: **(i)** irregularidades na representação processual dos autores, porque a inicial está acompanhada apenas de substabelecimento de Advogado estrangeiro, sem a devida procuração traduzida para a língua nacional e sem poderes específicos para ingressar com o pedido homologatório; **(ii)** ausência de jurisdição brasileira para executar a decisão homologanda, pois sua sede está localizada no Estados Unidos da América e não tem qualquer filial ou sucursal ou, ainda, subsidiárias diretas no Brasil, além de não haver qualquer obrigação a ser cumprida neste País; **(iii)** falta de interesse de agir dos autores e do Estado brasileiro, porque nem sequer tem bens no território nacional, passíveis de execução, e ser inadmissível suprimir-se a personalidade jurídica para invadir o patrimônio de outras empresas que não compuseram a lide que tramitou no Equador; **(iv)** a execução da sentença está obstada por decisão proferida pelo Tribunal Arbitral em Haia, ante a não observância de obrigações assumidas em tratado assinado entre os Estados Unidos da América e o Equador; **(v)** o *decisum* alienígena é fruto de uma série de fraudes e ilegalidades reconhecidas pela Justiça norte-americana que se negou a homologá-lo, além de constituir perseguição política à requerida, demonstrando ofensa à ordem pública e aos bons costumes, incluindo a atuação dos magistrados equatorianos; **(vi)** inexistência de trânsito em julgado da sentença, porque foi impetrado recurso de



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

cassação que foi admitido para julgamento, havendo, ainda, outras possibilidades de recorrer; **(vii)** inocorrência dos danos ambientais reconhecidos na decisão, pois restou comprovado que foram artificialmente criados no processo estrangeiro; **(viii)** possibilidade de suspensão deste procedimento homologatório até decisão final a ser prolatada pelo Tribunal Arbitral de Haia; **(ix)** celebração de acordo entre o Governo equatoriano (único legitimado à época para tutelar os direitos difusos e coletivos), provincial e municipal e a Petroecuador e a TexPet, de remediação ambiental, no valor de US\$ 40 milhões, com programas sociais, e de liberação de responsabilidade às atividades desenvolvidas, ato juridicamente perfeito e que fez coisa julgada material, mediante concessão de quitação, quanto a qualquer discussão acerca de eventual dano; **(x)** ilegitimidade da requerida, pois as atividades que supostamente causaram o dano ambiental foram exercidas pelo consórcio composto pela TexPet e pela Petroecuador, porém a ação foi proposta somente contra a CHEVRON CORPORATION, que não era integrante de referida união, nunca explorou petróleo no Equador e nem é sucessora da Texaco Inc. ou da Tex Pet; **(xi)** houve violação aos princípios da legalidade, da reserva legal, da vedação ao enriquecimento ilícito, da proporcionalidade e da razoabilidade quanto à ausência de fundamentação referente aos "*danos punitivos no Equador, no Brasil ou no cenário internacional*", resultando também em ofensa à ordem pública; **(xii)** nulidade da sentença, por ter incorrido em julgamento *extra petita* ao acolher pedidos formulados extemporaneamente; **(xiii)** falsificação da assinatura de pelo menos 20 dos autores na petição inicial da ação que resultou na sentença que se pretende homologar, além de outros terem apostado suas assinaturas de forma equivocada, induzidos a erro de consentimento, por pensarem que se tratava de pedido de medicamento; **(xiv)** violação aos princípios da isonomia e da moralidade administrativa, diante do tratamento diferenciado dado aos integrantes do consórcio, com privilégios à Petroecuador; **(xv)** inexistência de jurisdição do Equador com relação à CHEVRON CORPORATION; e **(xvi)** interferência do Poder Executivo na sentença, afetando a independência do julgador, o princípio do juiz natural e da separação dos



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

poderes (fls. 904/1.048). A resposta veio acompanhada da documentação de fls. 1.049/17.098.

Devidamente distribuída (fls. 17.108), pela requerida foram juntados novos documentos (fls. 17.142/18.967), ocasião em que reforçou o pedido de indeferimento da homologação postulada, sob os seguintes argumentos: **(i)** no Canadá, a análise do pleito homologatório da sentença estrangeira foi suspensa por tempo indeterminado, ante a ausência de qualquer ligação empresarial da CHEVRON CORPORATION naquele País; **(ii)** na Argentina, foi cassada a decisão de arresto de bens das subsidiárias indiretas da requerida, por entender que viola a ordem pública, tendo parecer da sua Procuradoria Geral no sentido de que todas são sociedades distintas, bem como a existência de malferimento ao devido processo legal por não terem sido citadas na ação; **(iii)** consultores ambientais declararam que redigiram laudo secreto para o perito oficial e revelaram que não houve o dano atribuído à requerida; **(iv)** a perícia teria sido elaborada de forma fraudulenta, mediante pagamento de determinada quantia em dinheiro; e **(v)** os Advogados dos autores da Ação de Lago Agrio, na qual foi proferida a sentença homologanda, teriam ludibriado fundo de investimento especializado em financiamento de litígios, *"para financiar o esquema de extorsão contra a **CHEVRON CORPORATION**, e que essa conduta representa fraude"* (fls. 17.124/17.141).

Por mais uma vez, a requerida peticionou postulando a juntada de documentação (fls. 18.980/19.962), contendo informações supervenientes, em especial o fato de haver alteração parcial na sentença estrangeira proferida no Equador, em razão de "recurso de cassação", no qual foi excluída a condenação ao pagamento de US\$ 8,6 bilhões que tinham sido fixados em decorrência de suposto dano punitivo. Notícia, ainda, que se encontra pendente de apreciação "ação extraordinária de proteção" que foi interposta pela requerida e conhecida pela Corte Constitucional do Equador (fls. 18.974/18.979).

Em nova oportunidade, a requerida também acostou cópia da sentença proferida pela Justiça norte-americana (fls. 19.992/20.949), cuja conclusão aponta que a decisão homologanda teria sido *"obtida por meio de fraude"* (fls. 19.968/19.991), e de demais outros documentos (fls. 20.953/21.007).



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Na réplica, os requerentes, exceto quanto aos danos punitivos, reiteram a pretensão de homologar a sentença estrangeira, aduzindo, em suma, que: **(i)** não há qualquer violação à ordem pública; **(ii)** inexistente irregularidade na representação processual dos autores, os quais, se ocorrente, estaria sanada com a apresentação de documentação complementar (fls. 21.120/21.255); **(iii)** os argumentos deduzidos na contestação relacionam-se ao mérito da questão já demandada e decidida no Equador, e está fora dos limites restritos de exame quanto à homologação da sentença pelo Superior Tribunal de Justiça; **(iv)** a inequívoca jurisdição no Brasil para a homologação da decisão alienígena, em razão do compromisso de reciprocidade; **(v)** há interesse dos autores, porque a requerida possui bens no País, pertinente à exploração de petróleo, e o deferimento de homologação independe da pretensão de execução da decisão; **(vi)** restou comprovado o trânsito em julgado da sentença estrangeira, pois, no direito equatoriano, a possibilidade de interposição de "recurso de cassação" constitui ação autônoma e não de continuidade processual, e a torna exequível, com autoridade de coisa julgada; **(vii)** a suspensão desmotivada no procedimento arbitral não tem o condão de surtir efeitos na Ação de Lago Agrio, uma vez que os requerentes nem sequer fazem parte de referido processo; **(viii)** inexistente a quitação por parte da requerida, porque o acordo celebrado com o Governo equatoriano diz respeito apenas quanto ao consórcio TexPet-Petroecuador; **(ix)** a CHEVRON CORPORATION tem legitimidade para figurar no polo passivo na ação em que foi proferida a sentença que se pretende homologar; **(x)** não houve atos de fraude, conforme alegado pela requerida, na ação em que restou condenada em razão de danos ambientais efetivamente existentes; **(xi)** a pretensão da requerida significa desrespeito à soberania dos Estados; e **(xii)** a CHEVRON CORPORATION almeja que o Poder Judiciário brasileiro utilize-se de decisões estrangeiras distorcidas, não homologadas (fls. 21.019/21.061). Juntaram parecer advocatício (fls. 21.063/21.118) e outros documentos (fls. 21.156/21.615).

Sobreveio tréplica, na qual a requerida: **(i)** afasta a intenção de que pretende rediscutir o mérito da ação ajuizada no Equador; **(ii)** afirma que os requerentes não sanaram as irregularidades referentes à representação



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

processual, os quais, ademais, não demonstraram o interesse de agir perante a Justiça brasileira; **(iii)** assevera que o "recurso de cassação" não sanou a sentença prolatada mediante fraude, reconhecida pelos Estados Unidos da América; **(iv)** as decisões arbitrais tornam a decisão temporariamente inexecutável no Brasil e no Equador; **(v)** assinala que a quitação decorrente de acordo celebrado gerou efeitos *erga omnes*; e **(vi)** reprisam os demais argumentos expostos na contestação e nas petições que acostou no sentido de que o pleito não preenche os requisitos necessários à sua homologação (fls. 21.621/21.685). À aludida peça, juntou diversos documentos (fls. 21.687/21.914).

Vieram os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.

## II

Sabe-se que, para fins de homologação de sentença estrangeira no Superior Tribunal de Justiça, é necessário o preenchimento de requisitos objetivos, que se encontram dispostos na Resolução nº 9/2005-STJ, a saber: (a) cópia da decisão proferida por autoridade competente; (b) prova da citação do requerido ou da decretação legal de sua revelia na ação que tramitou no exterior; (c) demonstração do trânsito em julgado da sentença; e (d) autenticação pelo Consulado-Geral do Brasil no local e a indispensável tradução oficial de todos os documentos (arts. 3º e 5º); e) inexistência de ofensa aos bons costumes, à ordem pública e à soberania nacional na decisão além-mar.

Ao ver do Ministério Público Federal, ressalta evidente a pertinência de um dos fundamentos agitados pela requerida, tornando desnecessário, até mesmo, o exame dos demais pontos suscitados pelas partes. Cuida-se da possibilidade real e concreta de a sentença estrangeira que se pretende homologar ter sido proferida mediante uma série de condutas fraudulentas.

Não se olvida que o ato de homologação da decisão proferida além-mar, não obstante faça prevalecer a aplicação da lei estrangeira em território nacional, é procedimento que envolve juízo de estreita deliberação, de contenciosidade limitada, sendo vedado o reexame do mérito do que decidido,



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

acertadamente ou não, pelo Judiciário do outro país. Em princípio, não configurada ofensa aos bons costumes, à ordem pública ou à soberania nacional, se preenchidos os demais requisitos formais, outro caminho não há senão homologar a sentença.

Diante disso, não cabe verificar, nessa seara, se, na espécie, existiram, ou não, os danos ambientais pelos quais a requerida restou condenada no Equador. Incumbe apenas à Corte Superior, no âmbito do pedido de homologação, analisar se o pleito preenche os requisitos formais contidos na Resolução nº 9/2005-STJ, e se, no caso específico, a sentença alienígena contestada ofende os bons costumes, a ordem pública ou a soberania nacional.

É justamente quanto a esse último aspecto que se verifica a impossibilidade de validação de referido julgamento, não só pela Justiça brasileira, mas – *obiter dictum* – em qualquer outra jurisdição estrangeira, seja em Estado Democrático de Direito ou não. Isso porque, das peças que compõem o presente procedimento, observam-se inúmeros elementos que apontam a grande probabilidade de que a decisão homologanda foi resultado de uma série de fraudes.

Na espécie, vê-se que a requerida foi processada pela prática de atos que teriam causado gravíssimos danos ambientais e afetado sobremaneira a população equatoriana, notadamente indígena, decorrentes da exploração de petróleo no leste do País, durante aproximadamente 30 anos por parte da intitulada subsidiária TexPet. Conforme anteriormente relatado, a sentença inicial condenou a recorrida ao pagamento de US\$ 8.646.160.000,00 (oito bilhões, seiscentos e quarenta e seis milhões, cento e sessenta mil dólares) a título de reparação de dano ao ambiente e à população local, e o mesmo valor a título de danos punitivos, além de 10% sobre o *quantum* condenatório referentes ao disposto no art. 43 da Lei de Gestão Ambiental do Equador, e de 0,1% relativo aos honorários advocatícios. A requerida interpôs “recurso de cassação”, que, parcialmente, provido, excluiu da condenação o valor concernente aos danos punitivos, mantendo, no mais, a decisão. No momento, segundo noticiado pela requerida, encontra-se pendente de julgamento, pela Corte Constitucional equatoriana, “ação extraordinária de proteção”.





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Por ocasião da contestação, e nas demais oportunidades em que se manifestou, CHEVRON CORPORATION insiste em alegar que o *decisum* alienígena é fruto de uma série de fraudes e de ilegalidades e que, por essa razão, ofende a ordem pública, fato que impede a sua homologação.

Da farta documentação juntada durante o processamento deste pleito, extraem-se, *v.g.*, decisões proferidas pelo Juízo Distrital Federal dos Estados Unidos da América, Distrito Sul de Nova York e Distrito do Novo México, que deferiram pedidos formulados pela CHEVRON CORPORATION e outros, com vistas à produção de prova oral e apresentação de *hard drives* e conteúdo referente a alguns endereços eletrônicos, entre outros elementos, destinados à inspeção judicial, cuja posse era mantida, em parte, pelo Advogado dos autores da Ação do Lago Agrio, senhor Steve Donziger (Processo 1:10-mc-00002-LAK e Processo 1:10-mc-00021-JCH-LFG), em razão das acusações indicadas pela requerida quanto à formação probatória (fls. 4.266/4.269, 4.417/4.421, 4.424/4.431 e 4.457/4.465).

Vale destacar, entre algumas das provas que foram produzidas, exemplificativamente, a realização de perícia em que se constatou que, entre as assinaturas supostamente apostas pelos autores da ação que tramitou no Equador, vinte são falsas, conforme se infere do "RESULTADO DO EXAME" (fls. 5.081):

As 20 (vinte) assinaturas examinadas que aparecem no documento denominado Prova Q-1 não foram apostas pelos 20 (vinte) autores individuais, e não foram apostas pelas mesmas pessoas que apresentaram as assinaturas conhecidas correspondentes que aparecem nos documentos denominados Prova K-1 a K-4.

Mas não é só! Após a produção de diversos elementos em Juízo, nos Estados Unidos da América, findo o Processo nº 1:11-cv-00691-LAK-JCF, do Distrito Sul de Nova York, efetivamente, concluiu-se pela existência da fraude alegada pela requerida. Confirmam-se fragmentos da parte introdutória da decisão norte-americana, que, apesar de extensos, vale referir, pois bem refletem a alta possibilidade de ter ocorrido corrupção em referidos autos (fls. 19.998/20.000):



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

“Esse caso é extraordinário. Os fatos são muitos e, por vezes, complexos. Eles incluem coisas que somente vemos em Hollywood – e-mails codificados entre Donziger e seus colegas descrevendo interações particulares com – e manipulações direcionadas a – juízes e um perito indicado judicialmente, pagamentos para um perito supostamente neutro por meio de uma conta secreta, um advogado que convidou uma equipe de filmagem para inúmeras reuniões secretas de estratégia e até mesmo encontros *ex parte* com juízes, um juiz equatoriano que alega ter redigido a sentença de bilhões de dólares, mas que era tão inexperiente e inseguro com casos cíveis que pediu a outra pessoa (um ex-juiz que havia sido exonerado) para minutar algumas decisões civis em seu nome, um digitador de 18 anos de idade que supostamente realizou pesquisas na Internet sobre as Leis Americanas, Inglesas e Francesas para o mesmo juiz, que apenas falava espanhol, e muito mais. O volume de provas é imenso (...).

Após considerar todas as provas, inclusive a credibilidade as testemunhas – embora muitas das mais importante tenham desistido de depor – o Juízo conclui que Donziger (...) e os advogados equatorianos sob o seu comando corromperam o caso Lago Agrio. Eles apresentaram provas fraudulentas. Eles coagiram um juiz, inicialmente para fazer com que um perito supostamente imparcial fosse apontado como “Perito Global”, responsável pela avaliação geral dos danos na região, e, depois, para que esse importante cargo fosse destinado a uma pessoa escolhida a dedo por Donziger para “jogar no time” dos Autores. Eles então pagaram secretamente uma empresa de consultoria do Colorado para redigir todo ou a grande parte do relatório do Perito Global, apresentando falsamente o laudo como se fosse o trabalho do perito nomeado pelo tribunal e supostamente imparcial, dizendo meias-verdades, ou pior, para Cortes nos Estados Unidos no intuito de tentar evitar a exposição desta e de outras infrações.

Por último, a equipe dos Autores redigiu a sentença de Lago Agrio e prometeu US\$ 500.000,00 para o juiz equatoriano decidir a seu favor e assinar sua sentença. Se alguma vez já houve um caso demandando uma medida equitativa com relação a uma sentença obtida por fraude, esse é o caso”.

(...)

A questão aqui não é o que aconteceu no Oriente há mais de vinte anos e quem, se é que existe, é responsável agora por quaisquer males na época. A questão diz respeito a saber se uma sentença judicial foi obtida por meios corruptos, independentemente da causa ter sido justa ou não. Um réu inocente não tem mais direito de apresentar provas falsas, de cooptar e pagar um perito indicado pelo tribunal, ou de coagir ou subornar um juiz ou um júri do que um réu culpado. Então, mesmo que Donziger e seus clientes tivessem justa causa – e essa Cote não expressa qualquer opinião a respeito – eles não tinham o direito de corromper o processo para alcançar o seu objetivo.

A Justiça não é feita com imposição de injustiça. Os fins não justificam os meios. Não existe uma defesa 'Robin Hood' para condutas ilegais e irregulares. E as desculpas dos réus de que 'é assim que funciona no Equador' – na realidade um notável insulto ao povo do Equador – não os ajuda. As condutas inapropriadas de Donziger e de sua equipe jurídica equatoriana seriam ofensivas às leis de qualquer nação que almeje o Estado de Direito, incluindo o Equador – e eles estavam cientes disso. De fato, um membro da equipe jurídica equatoriana, em um momento de puro pânico, admitiu que se documentos expondo apenas parte do que eles haviam feito viesse à tona,



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

'além de arruinar o processo, podemos ir todos, os seus advogados, para a cadeia'.

Ao emitir juízo de valor sobre os fatos que constituíram a conclusão proferida pela Justiça norte-americana, a decisão faz referência a graves assertivas do Advogado Steve Donziger quanto ao inerente caráter de corruptos dos juízes equatorianos, no sentido de que atuam mediante pressão midiática, popular e política, tendo até mesmo, em determinada oportunidade, declarado que a única forma de obter respeito desses magistrados "é se tiver medo de nós", sendo que, para tanto, têm que "acharem que nós temos o controle de suas carreiras, de seus trabalhos, de suas reputações, quer dizer, se sua capacidade de preservação da subsistência" (fls. 20.019).

Além disso, utilizou de estimativa bilionária imprecisa, assim reconhecida pelo Engenheiro Ambiental contratado pelo citado Advogado, fazendo circular declarações "falsas e enganosas" (fls. 20.024). A gravidade não para por aí. Consoante exposto na decisão em comento, houve também uso de perícia falsificada pela sua equipe. Confira-se (fls. 20.031/20.032):

Em 14 de fevereiro e 8 de março de 2005, respectivamente, a equipe dos LAPs apresentou ao tribunal de Lago Agrio aquilo que supostamente seriam os relatórios de seu perito indicado para inspeções judiciais dos locais Shushufindi 48 e Sacha 94. Eles tinham as assinaturas e a rubrica do Dr. Calmbacher e supostamente teriam sido escritos por ele. Os relatórios concluíram que "produtos químicos altamente tóxicos" contaminaram a área e que remediação da TexPet era "inadequada ou insuficiente". Quando esses relatórios lhe foram mostrados em um depoimento vários anos depois, porém, o Dr. Calmbacher testemunhou: "Eu não cheguei a estas conclusões e eu não escrevi este relatório". (...) Assim, alguém na equipe dos LAPs usou as páginas em branco que Calmbacher havia rubricado e suas páginas de assinatura para apresentar em seu nome dois relatórios, que continham conclusões as quais ele não havia chegado.

(...) Isso quer dizer que alguém da equipe equatoriana dos Autores revisou as minutas dos relatórios, os imprimiu nas páginas em branco rubricadas pelo Dr. Calmbacher, e protocolou os relatórios com ciência de que eram falsos.

A Justiça norte-americana concluiu, também, que um dos juízes que atuou na Ação de Lago Agrio foi coagido a cancelar as inspeções judiciais faltantes e a nomear o apontado Perito Global, da introdução, sobre o qual, segundo aquele Juízo, houve total controle por parte do indigitado Advogado,



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

tanto que, além dos pagamentos normal e legalmente feitos pelos autores da ação, "não foram os únicos que os LAPs fizeram a Cabrera", já que "pagaram também fora do processo judicial", antes mesmo de iniciado o trabalho pericial, por meio de uma "conta secreta" (fls. 20.049), na qual foram depositados pelo menos 120 mil dólares, conduta vedada pela legislação equatoriana (fls. 20.050) e considerada pela Justiça norte-americana de ilícita e imprópria (fls. 20.051). Não fosse tal fato, consta que o relatório referente à perícia oficial foi, em sua maior parte, confeccionado por uma equipe particular contratada pelo Advogado Steve Donziger (fls. 20.056).

Destaque-se, ainda, o lançamento do filme "Crude", documentário que registrou quase que todo o ocorrido de referido litígio. Não obstante a edição para que filmagens "comprometedoras" não fossem reveladas, CHEVRON CORPORATION a elas teve acesso, podendo, então, comprovar as suspeitas que mantinha quanto às apontadas fraudes (fls. 20.067/20.069).

E o ponto talvez de maior gravidade seja a revelação de que o Juiz Zambrano não foi o autor de grande parte da sentença que condenou a requerida (fls. 20.096). Quanto a esse aspecto, confirmam-se trechos da fundamentação da decisão proferida no Juízo dos Estados Unidos da América (fls. 20.096/20.150):

Essa parte examina as esmagadoras e irrefutáveis provas que estabelecem que partes de no mínimo oito dos documentos produto de trabalho interno da equipe dos Autores aparecem literal ou substancialmente na Sentença (...) Os Réus não conseguiram explicar como ou por que o produto de seu trabalho interno – suas "Impressões digitais" – aparecem na Sentença. Como será visto, a conclusão mais lógica é que os membros da equipe dos Autores escreveu no mínimo as partes importantes da Sentença e provavelmente substancialmente toda a Sentença, e que eles copiaram seus próprios arquivos internos a fazê-lo (...).

(...)

(...) a Sentença contém parte de oito documentos dos arquivos internos dos Autores, muitos deles *in haec verba*. (...)

(...)

Nas circunstâncias, a Corte conclui que os LAPs redigiram a Sentença em sua totalidade ou em grande parte e que Zambrano deu pouca ou nenhuma contribuição além de sua assinatura e, talvez, alguma edição leve, criada para tornar sua leitura mais parecida com outras decisões que ele assinou neste e em outros casos (...).

(...)

Em vista de todo o registro – incluindo mas não limitando-se às provas circunstanciais que dominam predominantemente a discussão da Chevron e a avaliação da Corte de todos os depoimentos pertinentes – a presente Corte



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

conclui que (a) Zambrano concordou com Fajardo para concluir o caso por um pagamento de \$500.000 a serem pagos com os recursos da sentença, (b) Fajardo o fez com expressa autorização de Donziger, (c) os LAPs prepararam a maior parte da minuta da Sentença e (d) Zambrano assinou sua minuta sem mudanças que trouxessem consequências como parte do *quid pro quo* pela promessa de \$500.000.

Foram constatadas tantas irregularidades e ilegalidades, que a Justiça norte-americana concluiu que a sentença da Ação de Lago Agrio, cuja executividade os requerentes buscam obter neste Tribunal, "foi obtida por meio de fraude", tanto mediante corrupção quanto coação dos Juízes e do Oficial de Justiça (fls. 20.174), conforme é possível inferir-se do seguinte trecho (fls. 20.175/20.176):

Este Tribunal concluiu, por meio de provas claras e convincentes, que Zambrano foi corrompido por Donziger e pelos LAPs. Com a aprovação de Donziger, Fajardo concordou em pagar a Zambrano \$500.000 do resultado da Sentença, sendo que em troca Zambrano decidiria a ação de Lago Agrio a favor dos LAPs e assinaria uma sentença fornecida pelos LAPs (...).

O Tribunal concluiu, também por meio de provas claras e convincentes, que Fajardo e Donziger coagiram o Juiz Yanez para permitir que os LAPs encerrassem suas inspeções judiciais restantes, para indicar um perito global e para designar a sua escolha, Richard Cabrera, para aquela função. Eles fizeram isso, sob ameaça de apresentar uma queixa de má conduta em um momento em que ele estava particularmente vulnerável e também por meio de outras pressões.

(...)

O Tribunal conclui, por meio de evidências claras e convincentes, que no mínimo algum desses pagamentos e benefícios, reais e prometidos, eram subornos prestados para influenciar as ações de Cabrera como perito global indicado pelo tribunal (...).

Após narrar outros diversos atos de extorsão, lavagem de capitais e de corrupção, a Justiça norte-americana concluiu (fls. 20.263):

A saga da ação de Largo Agrio é triste. É perturbador que o caminho da justiça foi pervertido. Os LAPs receberam a zelosa representação que eles queriam, porém triste que nem sempre ela tenha sido caracterizada pela honra e honestidade também. É incômodo que, nas palavras de Jeffrey Shinder, o que aconteceu aqui provavelmente significa que "nós nunca saberemos se houve ou não uma acusação contra a Chevron".

Mas nós já completamos todo o círculo. Como o Tribunal escreveu no início, "[a] questão neste caso não é o que aconteceu no Oriente há mais de vinte anos atrás, nem que, se há alguém, que agora seja responsável por quaisquer delitos cometidos naquela época. A questão diz respeito a saber se



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

uma sentença judicial foi obtida por meios corruptos, independentemente da causa ter sido justa ou não”.

**A sentença do caso Lago Agrio foi obtida por meios corruptos.** Os réus não podem tirar proveito de tal decisão sob qualquer forma. A ordem proferida hoje evitará que eles o façam (grifou-se).

É o quanto basta para se concordar que há fundada suspeita e elevadíssima probabilidade de que o *decisum* alienígena foi fruto de uma série de fraudes e de ilegalidades, assim reconhecidas pela Justiça norte-americana, tanto que se negou a homologá-lo, demonstrando efetiva ofensa à ordem pública e aos bons costumes.

Nem se diga que a decisão judicial oriunda dos Estados Unidos da América, que reconheceu a prática de fraude na sentença equatoriana, não serviria, por si só, para caracterizar ofensa à ordem pública, ao fundamento de que não tem valor “judicial” perante a Justiça brasileira, uma vez que não teria sido objeto de homologação e, portanto, desprovida de quaisquer efeitos jurídicos.

Não obstante o *decisum* impugnado não tenha eficácia judicial, vale dizer, não tenha força decisória no território nacional, traduz-se em elemento de prova (documental) – denominada pela doutrina de “eficácia probatória”<sup>1</sup> – perfeitamente válida quanto à suposta ocorrência de ilicitude na prolação da sentença homologanda, apta a limitar o deferimento do pleito inicial diante da possível ofensa à ordem pública.

JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, na sua obra *Comentários ao Código de Processo Civil*<sup>2</sup>, dedica capítulo exclusivo sobre o tema, cuja advertência demonstra o valor probante da sentença estrangeira não homologada no Brasil. Confira-se:

**54. Efeitos independentes da homologação** – A eficácia a que se refere o art. 483, e da qual se tratou no comentário anterior, é a que tem a sentença estrangeira *como ato decisório*. Quanto a essa, para que se manifeste no Brasil, é indispensável, sem sombra de dúvida, a homologação. Não quer isso dizer, todavia, que *nenhum* efeito se possa reconhecer, independente dela, ao julgado alienígena, no território nacional. Aliás, pelo

- 1 MIRANDA, Pontes de. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, Tomo V, 1974, p. 64.
- 2 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 79.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

menos *um* se tem de admitir que ele produza desde logo – se presentes, é claro, todos os requisitos: o de gerar, para quem haja de fazê-lo valer aqui, o direito à homologação.

Mas também **como documento, utilizável para fins probatórios, a sentença estrangeira pode mostrar-se apta a surtir efeitos no território nacional, independentemente do ato formal de reconhecimento** (grifou-se).

Ressalte-se que a prova documental trazida aos autos, no caso, não se cinge à mera ofensa à ordem pública interna, pois, na espécie, os atos ilícitos que teriam influenciado no resultado da sentença estrangeira são condutas que afrontam a ordem pública internacional, notadamente pelos indícios fundados de corrupção – que lamentavelmente está presente em espaços públicos e privados – configurando uma ameaça à democracia e ao crescimento econômico, além de potencializar o ceticismo em relação ao funcionamento das instituições.

A ordem pública internacional, na peculiar concepção dada por AMÍLCAR DE CASTRO<sup>3</sup>, também chamada de ordem social, não comporta divisão e pode ser ameaçada “*por leis, atos e sentenças de outro país, bem como por declarações de vontade feitas no estrangeiro, e o governo a resguarda, proibindo se atribua valor jurídico a essa atividade alienígena*”.

Muito embora a ordem pública não tenha definição própria na legislação, nem unanimidade doutrinária quanto ao seu conceito, não se necessita de maiores digressões para se concluir que sentença proferida sob o manto da delituosidade choca e afeta sobremaneira a ordem social e, por isso, tem o poder de limitar a admissão de eficácia das decisões estrangeiras no território nacional, nesses moldes exaradas<sup>4</sup>.

Chancelar sentença obtida mediante fundados elementos de corrupção – assim decidido com a observância do “*due process of law*” - é o mesmo que contribuir com o atraso social e fazer perpetuar históricos processos de

3 *Direito Internacional Privado*. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 225.

4 Independentemente de quem tenha sido, a ordem pública é um dos mais fortes pilares de sustentação do direito internacional privado, na medida em que pode conter/deter/impedir a aplicação do direito estrangeiro mesmo quando a norma de solução de conflito de leis manda aplicá-lo. Razão pela qual devemos sempre buscar o “equilíbrio” entre a obrigação de aplicar o direito estrangeiro (como se juiz estrangeiro fosse) e o respeito à ordem pública local (BASSO, Maristela. *Curso de Direito Internacional Privado*. São Paulo: Atlas, 2009, p.262).



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

desmandos, de patrimonialização do Estado e de dominação social, política e econômica.

A Convenção Interamericana contra a Corrupção, da OEA — Organização dos Estados Americanos, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 5.687/2006), estabeleceu importantes premissas em relação à problemática da corrupção: a) a corrupção compromete a legitimidade das instituições públicas e atenta contra o desenvolvimento integral dos povos; b) a corrupção é um dos instrumentos de que o crime organizado se vale para realizar seus fins; c) a democracia é condição para a estabilidade das relações sociais e o desenvolvimento, exigindo o combate efetivo à corrupção; d) a formação de uma consciência em relação à gravidade do problema da corrupção e da necessidade de reforçar a participação da sociedade civil na prevenção e na luta contra esse mal é uma importante estratégia a ser implementada pelos Estados; e) a corrupção se reveste de transcendência internacional, exigindo por parte dos Estados uma ação coordenada para seu combate eficaz; e f) a repressão à corrupção não pode prescindir da erradicação da impunidade.

Finalmente, não é demasiado lembrar que, em caso muito menos gravoso, a Corte Superior já deixou de homologar a sentença estrangeira. Confira-se:

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. HOMOLOGAÇÃO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CITAÇÃO. CARTA ROGATÓRIA. NECESSIDADE.

1. A sentença em exame é despida de qualquer rastro de fundamento, apresentando uma nudez de motivação que chega a impressionar e recomenda definitivamente a improcedência do pedido, sob pena de frontal desrespeito à ordem pública nacional que significaria cancelar uma decisão judicial teratológica. Precedente: SEC 880/IT, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 06.11.06.
2. Não consta qualquer elemento probatório apto a demonstrar a competência da Corte de Nova Iorque para analisar a demanda. A alegação deduzida no sentido de que o foro foi eleito por meio de contrato não se encontra respaldada na referida avença, cujo instrumento sequer foi carreado aos autos no intuito de evidenciar a regularidade do processo originário.
3. A única modalidade de citação admitida para réu domiciliado no Brasil é a realizada por carta rogatória. Precedentes: SEC 1.483/LU, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 29.04.10; SEC 4.611/FR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22.04.10; SEC 477/US, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 26.11.09; SEC 2.493/DE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 25.06.09.
4. Homologação indeferida.





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

(SEC 684/US, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2010, DJe 16/08/2010)

Eis, portanto, algumas das razões pelas quais este *Parquet* entende inviável a homologação da sentença estrangeira que, ao que tudo indica, foi proferida de forma irregular, em especial sob desditosos atos de corrupção, a importar ofensa à ordem pública internacional<sup>5</sup> e, porque não, aos bons costumes, em total desrespeito ao estabelecido pelo art. 6º da Resolução nº 9/2005 do Superior Tribunal de Justiça.

Face ao exposto, o parecer do Ministério Público Federal é pela **não homologação** da sentença estrangeira contestada.

Brasília, 11 de maio de 2015

**NICOLAO DINO**  
Subprocurador-Geral da República

---

5 E acima de tudo para a ordem pública verdadeiramente internacional, regida pelos interesses universais, que exige coordenação e colaboração entre os Estados para manter o equilíbrio do meio ambiente, da disciplina das atividades internacionais, do controle da criminalidade internacional, dos interesses internacionais em geral e, acima de tudo, da paz entre os povos (DOLINGER, Jacob. *Direito Internacional Privado: parte geral*. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 455).